

Conflictividad social en América Escenarios y estrategias de resp ante amenazas híbridas

*Social Conflict in Latin America: Scenarios and F
Strategies to Hybrid Threats*



Autor: Daniel López Fuentes



Latina: uesta

Response

Gemini (Google AI 2025)

Conflictividad social en América Latina: Escenarios y estrategias de respuesta ante amenazas híbridas

Magíster

Daniel López Fuentes

Asesor, Criminólogo y Docente Educación Superior

Colegio de Altos Estudios Estratégicos

Jefe Departamento de Investigación

lopez.daniel@caee.edu.sv

(+503) 77552178

Recibido: 14-05-2025

Aceptado: 19-09-2025

Publicado: 15-12-2025

Resumen

El análisis prospectivo en América Latina se justifica por la complejidad de los fenómenos de conflictividad social, como la violencia estructural, el narcotráfico y la desigualdad económica. Estos problemas están interrelacionados y evolucionan constantemente, lo que exige anticipar su impacto y respuestas sociales. Este enfoque permite identificar tendencias y escenarios emergentes para planificar políticas públicas efectivas. El estudio la conceptualiza como una interacción de fuerzas sociales, políticas y económicas que generan tensiones y exclusión. A pesar de los esfuerzos gubernamentales e internacionales, las desigualdades estructurales, la corrupción y el crimen organizado agravan la situación. La investigación emplea una metodología mixta, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos, y se basa en la planeación por escenarios de Peter Schwartz, permitiendo explorar futuros posibles y tomar decisiones estratégicas en contextos de alta incertidumbre.

Palabras Clave

- Análisis prospectivo
- Conflictividad social
- América Latina
- Planeación por escenarios
- Desigualdad económica
- Violencia estructural

Abstract

Prospective analysis in Latin America is justified by the complexity of social conflict phenomena such as structural violence, drug trafficking, and economic inequality. These interrelated and evolving issues demand foresight to anticipate their impact and social responses. This approach allows identify trends and emerging scenarios to facilitate effective public policy planning. The study conceptualizes social conflict as an interaction of social, political, and economic forces generating tensions and exclusion, particularly affecting vulnerable communities. Despite governmental and international efforts, structural inequalities, corruption, and organized crime exacerbate the situation. The research employs a mixed methodology, combining qualitative and quantitative approaches, and draws on Peter Schwartz's scenario planning, enabling the exploration of futures and strategic decision-making in highly uncertain contexts.

Key Words

- Prospective analysis
- Social conflict
- Latin America
- Scenario planning
- Economic inequality
- Structural violence

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo de carácter teórico fue concebido con el propósito de aportar un marco de referencia sólido y debidamente fundamentado que sirva como insumo bibliográfico para los cursos y procesos formativos que desarrolla el INEES. La inclusión de una sección metodológica detallada no responde únicamente a un rigor académico, sino también a la intención de ofrecer un texto que pueda ser consultado como guía para futuras investigaciones y como base de análisis en el ámbito de la seguridad y la defensa. De esta manera, se busca contribuir no solo a la reflexión crítica sobre los temas abordados, sino también al fortalecimiento del acervo académico disponible para la formación de profesionales en el área.

Por tanto, la inclusión de autores como Peter Schwartz, Max Weber y Michel Foucault, así como el desarrollo metodológico basado en escenarios, tiene como propósito dotar a los lectores de fundamentos teóricos aplicables a contextos reales de toma de decisiones estratégicas, enriqueciendo a los lectores su acervo al ofrecer una base conceptual que complemente futuras publicaciones más focalizadas en casos específicos.

Así pues se afirma que el análisis prospectivo en América Latina se justifica por la creciente complejidad de los fenómenos de conflictividad social que atraviesa la región, tales como violencia estructural, narcotráfico y desigualdad económica. Estos problemas están interrelacionados y evolucionan constantemente, lo que exige una mirada a futuro para anticipar sus posibles impactos y las respuestas sociales necesarias. El estudio prospectivo permite identificar tendencias, patrones y escenarios emergentes, lo que facilita la planificación de políticas públicas más efectivas. Además, al abordar los conflictos desde una perspectiva temporal, es posible considerar no solo las dinámicas actuales, sino también las fuerzas sociales, económicas y políticas que podrían redefinir el panorama de los choques sociales en el futuro, ayudando a los gobiernos y organizaciones internacionales a desarrollar estrategias preventivas y reactivas.

Bajo esa lógica el conflicto social en América Latina se puede conceptualizar como un fenómeno complejo que involucra una interacción de diversas fuerzas sociales, políticas y económicas que generan tensiones y disputas dentro de la sociedad. Estas tensiones suelen manifestarse en diversas formas de violencia, marginación y exclusión, que afectan tanto a la población en general como a sectores específicos, como a las minorías étnicas y los movimientos sociales.

Es de recordar entonces que el principal problema que aborda este análisis es la persistencia y agravamiento de la turbulencia social, que se ve reflejada en diversas manifestaciones de violencia y desestabilización política. A pesar de los esfuerzos por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales, las profundas desigualdades económicas y sociales siguen siendo una causa estructural de la violencia y el crimen organizado. Se suma la corrupción, debilidad de las instituciones y expansión de los actores no estatales como las organizaciones criminales, las cuales exacerban la conflictividad, impidiendo soluciones efectivas y duraderas. Este panorama plantea la necesidad de estudiar las dinámicas de la conflictividad desde una perspectiva prospectiva para identificar posibles futuros escenarios y proponer alternativas de política pública que puedan mitigar las tensiones y mejorar la seguridad y la cohesión social en la región.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

a. Metodología

La metodología empleada en este análisis prospectivo es mixta, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos para ofrecer una visión integral de dicha temática en América Latina. La parte cuantitativa se enfoca en la recolección de datos a través de búsqueda bibliográfica, lo que permite obtener una comprensión profunda de los conflictos sociales y sus factores como pobreza, violencia, narcotráfico

y gobernabilidad. Esto permite no solo mapear las dinámicas actuales, sino también proyectar futuros posibles, ayudando a identificar variables clave para la prevención de conflictos y a proponer medidas políticas adaptadas a las realidades cambiantes de la región.

b. Tipo de Investigación

Esta es una investigación mixta, pues se busca la comprensión profunda de los contextos y las experiencias de los individuos afectados por la violencia, crimen organizado y exclusión social, midiendo la extensión de fenómenos como la violencia, desigualdad económica o prevalencia de organizaciones criminales en distintos países de la región (Hernández Sampieri, R., 2014).

c. Alcance

Es descriptivo en la medida que se busca ofrecer un panorama detallado de los fenómenos sociales y las condiciones que los agravan, como la desigualdad o la violencia.

d. Metodología Prospectiva: Peter Schwartz y la planeación por escenarios

Peter Schwartz usa una metodología que permite anticipar futuros posibles en contextos de alta incertidumbre. En América Latina, una región caracterizada por una historia de conflictos políticos, sociales y económicos, este enfoque resulta esencial para la toma de decisiones estratégicas en un entorno impredecible. La inequidad social en la región, marcada por desigualdad, exclusión y descontento popular, crea un escenario inestable que podría beneficiarse enormemente de la planeación por escenarios, ya que ofrece un marco para explorar diversos futuros posibles y tomar decisiones informadas en contextos de alta volatilidad (Hoffman, 2004).

A través de la planeación por escenarios, Schwartz propone el desarrollo de múltiples visiones del futuro basadas en tendencias actuales, incertidumbres y posibles cambios disruptivos. En América Latina, este enfoque se puede aplicar para prever distintos desarrollos en relación con el crecimiento de los movimientos sociales, las crisis económicas o los conflictos políticos.

Uno de los aspectos clave del enfoque de Schwartz es que la planeación por escenarios no busca predecir el futuro de manera exacta, sino más bien explorar los posibles cursos de acción que podrían materializarse dependiendo de cómo se desarrollen ciertos factores (Schmalbach, J., Díaz, H., & Gómez, J., 2010).

En el contexto de América Latina esta metodología es particularmente útil porque permite que los gobiernos y las organizaciones sociales se preparen para una variedad de situaciones, desde estallidos sociales y protestas hasta reformas políticas o acuerdos de paz. Esta preparación permite no solo reaccionar de manera efectiva a los conflictos cuando surjan, sino también actuar proactivamente para evitar que los conflictos escalen y se vuelvan incontrolables.

La planeación por escenarios fomenta un proceso inclusivo que involucra a diversos actores sociales en la creación de futuros posibles. Este enfoque puede abrir espacio para que comunidades históricamente marginadas participen activamente en la toma de decisiones sobre su futuro, al incluir las voces de estos sectores en los procesos de planeación (Medina Vásquez, J., & Ortegón, E., 2006).

El enfoque de Schwartz también destaca la importancia de reconocer las incertidumbres que afectan a la región y cómo estas pueden influir en los conflictos. Factores como el cambio climático, la globalización y las políticas internacionales pueden alterar significativamente la estabilidad política y social en América Latina. La planeación por escenarios permite analizar cómo estas fuerzas externas podrían incidir en los conflictos sociales y al mismo tiempo, anticipar cómo los actores locales podrían reaccionar ante tales cambios. Este enfoque ayuda a preparar a las naciones latinoamericanas para enfrentar los desafíos globales de manera estratégica, minimizando los impactos negativos sobre la estabilidad social y económica (Schmalbach, J., Díaz, H., & Gómez, J., 2010).

3. PROCEDIMIENTOS

Las variables que se estudian en el contexto del conflicto en la sociedad de América Latina incluyen, entre otras, la violencia estructural, narcotráfico, desigualdad social, correlación entre pobreza y criminalidad y gobernabilidad.

Cada una de estas variables debe ser operacionalizada de manera que puedan ser medidas y analizadas de manera objetiva. Al definir claramente estas variables y establecer cómo se medirán, la investigación se enfoca en obtener datos precisos y útiles para comprender los vínculos entre las diversas dimensiones de esta temática.

4. PROCESO DE ANÁLISIS

a. Teorías sobre el conflicto social

Las teorías sobre el conflicto social han desempeñado un papel imprescindible en la comprensión de las tensiones y dinámicas presentes en las sociedades a lo largo de la historia. Estas teorías abordan el conflicto como una fuerza inherente a la interacción social, derivada de desigualdades estructurales, disputas de poder y diferencias ideológicas (Tromben, V., Cea, C., & Acuña, C., 2022).

b. Max Weber: Perspectivas sobre dominación

Max Weber, en su análisis sobre la dominación, ofrece una visión que complementa la teoría del conflicto de clases de Marx, pero enfocándose en los aspectos sociales y culturales del poder. Para Weber, la dominación no solo se da en términos económicos, sino también en términos de autoridad, y se basa en la legitimidad que las personas otorgan a quienes ejercen el poder. En América Latina, la dominación se ha manifestado de diversas formas con estructuras profundamente jerárquicas y desiguales. Esta legitimidad otorgada a las élites sociales y políticas contribuye a la reproducción de las desigualdades y la perpetuación de sistemas de dominación que limitan la participación real de la mayoría en las decisiones políticas (Weber, 2002).

En la región, esto se refleja en la persistencia de estructuras patriarcales y oligárquicas, donde los líderes tradicionales, como terratenientes y familias influyentes, mantienen un control sobre vastos sectores de la población. Estas formas de dominación, aunque menos visibles en términos de coerción directa, siguen siendo decisivos para mantener el orden social en muchas partes de América Latina.

c. Michel Foucault: Relaciones de poder

Michel Foucault, en su análisis de las relaciones de poder, proporciona una visión que se aleja de las explicaciones tradicionales centradas exclusivamente en las estructuras políticas o económicas. Según Foucault, el poder no solo se ejerce desde un centro (como el Estado o las élites), sino que está presente en todos los niveles de la sociedad, de forma dispersa y difusa. En América Latina, las relaciones de poder se manifiestan en una red compleja de prácticas sociales, culturales y económicas, donde no solo los gobiernos, sino también instituciones como familia, escuela e iglesia juegan roles determinantes en la reproducción de las desigualdades y el control social. El poder, entonces, se encuentra en todas las relaciones sociales y se ejerce a través de normas, valores y discursos que configuran la manera en que las personas se comportan y se perciben a sí mismas (Foucault, 1975).

Para Foucault el poder no se reduce a la represión o la coerción, sino que se ejerce a través de lo que él llama "microfísicas del poder", es decir, en las pequeñas interacciones cotidianas que forman parte de la vida de las personas. En América Latina, esto se puede observar en cómo las prácticas de control social se manifiestan en los barrios, en las relaciones laborales, en las políticas de seguridad pública y en las formas en que se construye la identidad. Las dinámicas de poder se encuentran en la forma en que los cuerpos son vigilados, clasificados y controlados, ya sea en las escuelas, en las cárceles o en las calles, donde la presencia de las fuerzas del orden y la vigilancia Estatal son constantes. El poder actúa no solo desde la cima de la jerarquía, sino también desde abajo, en la gestión de la vida cotidiana (Foucault, 1975).

Foucault también aborda la resistencia como una forma inherente al ejercicio del poder. En América Latina, la resistencia a las estructuras de poder ha sido un elemento constante de la fractura social. La resistencia no siempre toma la forma de rebeliones abiertas, sino que a menudo se manifiesta en formas sutiles de subversión y desobediencia, que cuestionan las normas impuestas y buscan redefinir las relaciones de poder.

d. Lewis Coser: Funciones positivas del conflicto

Lewis Coser, destaca que los conflictos sociales

no son necesariamente destructivos, sino que pueden tener efectos positivos dentro de una sociedad. Según Coser, el conflicto puede ser un mecanismo de adaptación social y de resolución de tensiones latentes dentro de los grupos. En el contexto de América Latina, donde persisten desigualdades profundas y tensiones históricas, los conflictos sociales no solo expresan malestar, sino que también actúan como una forma de reorganizar las estructuras sociales y políticas, empujando a la sociedad hacia un cambio. Movimientos como las protestas estudiantiles, las manifestaciones laborales o las luchas indígenas han tenido un papel clave en la visibilización de problemas estructurales y en la búsqueda de reformas que respondan a las demandas de justicia social (Coser, 1956).

Coser también argumenta que el conflicto puede funcionar como una válvula de escape para tensiones que, de otro modo, podrían resultar en una explosión destructiva. En muchas sociedades latinoamericanas, los conflictos han servido como mecanismos para canalizar la frustración y la ira acumuladas de sectores sociales marginados. Este tipo de conflictos a menudo se dan en el marco de protestas populares, donde las grandes movilizaciones han sido una forma de visibilizar y enfrentar las desigualdades en torno a la distribución de riqueza, educación, salud y derechos laborales. De esta manera, los conflictos sociales, aunque puedan ser violentos o disruptivos en un principio, pueden evitar un conflicto aún más grave al ser gestionados a través de canales políticos y sociales. Es decir que el conflicto también puede servir como un mecanismo de cambio social, ya que crea el espacio para la innovación política, económica y cultural (Coser, 1956).

e. John Paul Lederach: Resolución y transformación del conflicto

John Paul Lederach, experto en resolución de conflictos, propone una visión que va más allá de la simple resolución de disputas, enfocándose en la transformación de las relaciones y estructuras subyacentes que generan el conflicto. Según Lederach, la resolución de conflictos en América Latina debe centrarse no solo en la mediación de las disputas inmediatas, sino también en abordar las causas profundas de las tensiones sociales, como pobreza, exclusión y desigualdades históricas.

En muchas zonas latinoamericanas, el conflicto no es un evento aislado, sino el resultado de una acumulación de injusticias estructurales que deben ser transformadas para lograr una paz duradera (Lederach, J. P., 1997).

Este enfoque busca resolver el conflicto de manera temporal y cambiar las dinámicas de poder que perpetúan la violencia y desigualdad, destacando la importancia de involucrar a todos los niveles de la sociedad en la resolución y transformación del conflicto. En América Latina, los conflictos a menudo están profundamente arraigados en los sectores empobrecidos, pero también afectan a las estructuras nacionales e internacionales. Por lo tanto, la resolución de conflictos debe ser un proceso inclusivo que involucre no solo a las élites políticas y económicas, sino también a los actores sociales, como indígenas, campesinas y urbanas, así como movimientos de derechos humanos y organizaciones de base. Este enfoque participativo permite que los distintos actores construyan una visión compartida del futuro y encuentren soluciones que sean justas y sostenibles, respetando la diversidad de intereses y perspectivas presentes en la región (Aragón Sánchez, G, 2020).

f. Factores Estructurales de la Conflictividad Social en América Latina

Son aquellos elementos profundamente enraizados en las estructuras sociales, económicas y políticas de la región que generan desigualdades y tensiones a lo largo del tiempo. La histórica desigualdad en la distribución de la riqueza es uno de los principales factores estructurales. Otro factor estructural importante es la persistente violencia derivada del narcotráfico y las bandas criminales, especialmente en países como Colombia, México y Honduras. El narcotráfico ha permeado profundamente las estructuras sociales y políticas, creando una economía paralela que fomenta la corrupción, impunidad y desconfianza en las instituciones Estatales. La violencia relacionada con el narcotráfico y las mafias ha alimentado la tensión social, ya que ha desbordado las capacidades de los gobiernos para garantizar la seguridad y atrápanlas en un ciclo de violencia constante (Barreira, 2013).

La desigualdad económica también es un

factor que contribuye a la agitación social en la región. A pesar de los avances en ciertas áreas, la distribución de la riqueza sigue siendo extremadamente desigual. Esta brecha económica crea una percepción de injusticia y desencadena sentimientos de frustración y descontento, especialmente en sectores históricamente marginados, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. La falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda en muchos casos profundiza esta desigualdad, generando tensiones sociales y dando pie a movimientos de protesta y demanda de justicia económica (Cantamutto, 2013).

La falta de movilidad social también es un factor importante por lo que de generación en generación no hay acceso a mejores empleos y mejorar su situación económica, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión, donde las personas nacen en situaciones de desventaja y tienen pocas probabilidades de escapar de ellas, alimentando la frustración y el resentimiento hacia un sistema que se percibe como injusto y que refuerza la desigualdad, creando condiciones propicias para la conflictividad social (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024).

La crisis institucional y la debilidad del Estado son factores determinantes en la perpetuación de la inestabilidad social, debido a que las instituciones encargadas de garantizar el bienestar de los ciudadanos, se encuentran débiles y corruptas, lo que genera un vacío de autoridad y una desconfianza generalizada hacia las estructuras del gobierno. Cuando el Estado no logra ofrecer respuestas eficaces a las demandas de la población, especialmente en términos de justicia, educación, salud y seguridad, la brecha entre el gobierno y la ciudadanía se amplía, alimentando el descontento social. Esto se ve reflejado en la creciente movilización de sectores sociales que sienten que no tienen otros medios para hacer escuchar sus voces más allá de las protestas y manifestaciones (González, 2019).

La corrupción debilita aún más la capacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades hacia la ciudadanía y alimenta la percepción de que el Estado está al servicio de intereses privados y no de la población en general. Cuando los recursos destinados al bienestar social son mal gestionados o desviados

hacia fines personales o partidistas, la población pierde confianza en la capacidad del Estado para generar un cambio positivo (Sampó, 2004).

La debilidad del Estado también se refleja en su incapacidad para garantizar la seguridad y el orden público, lo cual es primordial para mantener la paz social. En muchas regiones donde el narcotráfico, bandas criminales y grupos paramilitares han ganado terreno, el Estado no ha logrado ofrecer una respuesta efectiva para proteger a la ciudadanía. Esta falta de control sobre el territorio genera un vacío de poder que favorece la violencia y el crimen fomenta el malestar y la movilización social (Orrego, 2000).

En cuanto a la corrupción institucional, es uno de los principales motores del malestar social, ya que genera una profunda desconfianza entre la población y las estructuras gubernamentales. Este fenómeno socava la legitimidad del Estado. La corrupción institucional también está estrechamente vinculada con la debilidad de las instituciones del Estado. Cuando los funcionarios públicos están involucrados en prácticas corruptas, se produce una erosión de la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas efectivas y transparentes (Hernández, 2021).

Un factor más es la expansión del crimen organizado, siendo clave en el aumento de la fractura social en la región, generando violencia, inseguridad y desconfianza en las instituciones. En muchos países, grupos criminales, como cárteles de drogas, pandillas y organizaciones de tráfico de personas, han ganado poder y control en diversas áreas, desde las zonas urbanas hasta las rurales. La falta de presencia efectiva del Estado en ciertas regiones ha permitido que estos grupos se expandan, establezcan redes de control territorial y ejerzan poder paralelo, lo que incrementa la inseguridad de la población y genera una constante sensación de peligro. Esta situación ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida y al desbordamiento de los recursos públicos destinados a la seguridad (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011).

Los grupos criminales tienen la capacidad de infiltrar a las instituciones del Estado,

especialmente las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los cuerpos legislativos a través de sobornos y amenazas. Esta corrupción institucional impide que se tomen medidas efectivas para frenar el crecimiento del crimen organizado y garantizar la justicia (Bustamante, 2019).

La expansión del crimen organizado ha generado un desafío significativo para las políticas de seguridad y justicia en América Latina. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos para combatir las organizaciones criminales mediante operativos militares y policiales, la violencia sigue siendo un problema creciente en muchos países. En lugares como México, Colombia, Guatemala, Ecuador y Honduras, el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y las pandillas ha resultado en altos índices de homicidios, desplazamientos forzados y una crisis de derechos humanos.

La violencia relacionada con el crimen organizado también tiene un impacto directo sobre las dinámicas sociales y económicas en los países, ya que las áreas más afectadas por el narcotráfico, tráfico de armas o extorsión suelen sufrir un colapso en su desarrollo económico y social. Los comerciantes y pequeños empresarios, por ejemplo, son a menudo víctimas de extorsiones y amenazas, lo que les impide operar con normalidad. Las familias se ven obligadas a vivir en un ambiente de constante peligro, con pocos recursos para protegerse o para acceder a servicios públicos esenciales. Este deterioro de las condiciones de vida, sumado al miedo y a la inseguridad, alimenta el malestar social y crea un caldo de cultivo para movimientos de protesta, en los que los ciudadanos demandan respuestas claras y eficaces por parte del gobierno (Dammert, 2025).

El crimen organizado también alimenta el ciclo de violencia a través del reclutamiento de jóvenes, quienes, debido a la falta de oportunidades laborales y educativas, son atraídos por los grupos criminales. La promesa de poder, dinero y pertenencia a una estructura más grande que la que pueden encontrar en su comunidad puede resultar atractiva para muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esto no solo perpetúa el ciclo de violencia y crimen, sino que también destruye el tejido social de las entidades afectadas, ya que los jóvenes se ven atrapados en actividades ilegales y violentas (Serrano, 2015).

En cuanto a los actores no estatales y su influencia en la seguridad pública juegan un papel fundamental en su configuración y en la perpetuación de la confrontación social. Grupos como pandillas, cárteles de drogas, las organizaciones paramilitares y otros actores ilegales han logrado ejercer un control significativo sobre territorios, influyendo de manera directa en las dinámicas de violencia y seguridad. Estos actores no solo desafían la autoridad del Estado, sino que también generan un clima de inseguridad que afecta a millones de ciudadanos. En muchas regiones, el Estado no tiene la capacidad de garantizar la seguridad, lo que ha permitido que actores no estatales tomen el control y gestionen su propio orden social, muchas veces con métodos violentos que exacerban la conflictividad en las diferentes zonas (Vega, 2007).

La influencia de estos actores no estatales en la seguridad pública también se ve reflejada en la corrupción que generan dentro de las instituciones gubernamentales. A través de sobornos, intimidaciones y redes de complicidad, los grupos ilegales pueden penetrar las fuerzas de seguridad, la policía y los sistemas judiciales, debilitando la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y para proteger a los ciudadanos. La corrupción asociada con estos actores no solo afecta la eficacia de las políticas de seguridad, sino que también incrementa la percepción de impunidad, lo que contribuye a la desconfianza en las instituciones del Estado (Trejos, 2016).

Los actores no estatales a menudo se aprovechan de las desigualdades sociales y económicas para consolidar su poder. Al ofrecer beneficios económicos a las poblaciones más vulnerables, como protección, empleo ilícito o servicios básicos, logran ganar apoyo y lealtad de sectores que no reciben atención del Estado.

Estos actores no solo disputan el control del territorio con otros grupos criminales, sino que también desafían el monopolio legítimo de la violencia que debería ejercer el Estado, creando un ambiente de inseguridad y caos que perpetúa la conflictividad.

La presencia y el poder de estos actores no estatales también se reflejan en la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para abordar de manera efectiva los problemas de seguridad y justicia.

Los actores no estatales han adquirido una influencia considerable sobre la seguridad pública en la región, complicando aún más la tarea del Estado para garantizar la paz social. Estos grupos a menudo controlan áreas enteras, especialmente en barrios marginales o regiones rurales, donde el Estado tiene poca presencia o no ejerce control efectivo. Al tomar las riendas de la seguridad, estos actores no solo generan un ambiente de violencia constante, sino que también suplantán las funciones del gobierno, creando una especie de "paralelismo" que amenaza el monopolio legítimo del Estado sobre la violencia y el orden público (Morejón, 2022).

La capacidad de los actores no estatales para ejercer control sobre el territorio también está estrechamente vinculada a su habilidad para generar y mantener economías paralelas, especialmente en el contexto del narcotráfico y el contrabando. Estas actividades ilícitas permiten a los grupos criminales acumular grandes sumas de dinero, lo que les da poder para corromper a funcionarios públicos, tanto en la policía como en el sistema judicial. Esta corrupción no solo impide que se haga justicia, sino que también crea una red de complicidad que facilita la expansión del crimen organizado. En zonas "controladas" por pandillas o cárteles, los ciudadanos a menudo prefieren negociar con estos grupos en lugar de confiar en las autoridades, ya que perciben que la policía y otras instituciones del Estado son igualmente corruptas o ineficaces.

g. El caso del Tren de Aragua: Expansión, violencia y efectos socioeconómicos

El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina, surgió en Venezuela a finales de los años 1990, inicialmente como una banda de delincuentes locales vinculados al crimen común y el robo. Su origen se encuentra en las cárceles venezolanas, donde surgieron como una de las muchas pandillas carcelarias que controlaban el narcotráfico y el contrabando de bienes dentro del sistema penitenciario. Con el paso del tiempo, esta organización se consolidó como una de las más poderosas, ampliando sus actividades hacia el narcotráfico, extorsión y trata de personas. La falta de control estatal en muchas zonas de Venezuela, a

exacerbada por una crisis económica y política profunda, permitió que el Tren de Aragua se estableciera como un actor dominante, no solo en el crimen organizado local, sino también en la política informal de ciertas regiones. La creciente inestabilidad política y social en Venezuela favoreció la consolidación de estas estructuras criminales, que comenzaron a operar de manera más abierta y violenta, afectando gravemente la seguridad de la población (Unidad Investigativa de Venezuela, 2023).

A medida que la organización fue creciendo, el Tren de Aragua amplió su presencia fuera de Venezuela, infiltrándose en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Su expansión transnacional se caracterizó por la adaptación a nuevas dinámicas de control territorial, asumiendo funciones de "gobernanza paralela" en zonas marginadas y sin presencia efectiva del Estado. En estos territorios, el Tren de Aragua no solo se dedicó a actividades ilícitas, sino que también empezó a ofrecer "servicios" a la comunidad, como protección, empleo en actividades criminales y control de mercados ilegales, creando una relación ambigua con la población local.

El impacto del Tren de Aragua sobre la seguridad y la gobernabilidad regional ha sido devastador, pues su expansión ha contribuido a un aumento significativo de la violencia y el crimen organizado en los países donde ha logrado establecerse, al competir con otras facciones criminales, la violencia ha escalado rápidamente, llevando a los gobiernos a enfrentar graves dificultades para restaurar el orden público (Troncoso, 2024).

Se establece así un ciclo perverso: la debilidad institucional genera un vacío de poder que es rápidamente ocupado por actores criminales, quienes instituyen un orden paralelo que, a su vez, debilita aún más la legitimidad y la capacidad de acción estatal.

h. Bandas transnacionales en Centroamérica: Maras y su impacto

1) Mara Salvatrucha (MS-13)

La Mara Salvatrucha (MS-13) es una de las bandas transnacionales más conocidas en Centroamérica, consolidándose como una de las

organizaciones criminales más violentas y temidas, la MS-13 ha desarrollado una estructura jerárquica y un control territorial en áreas marginales y urbanas, donde la pobreza, falta de oportunidades y la ausencia de un Estado efectivo facilitan su proliferación. La MS-13 no solo está involucrada en actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, sino que también ejerce control sobre los territorios mediante el miedo, violencia e intimidación. Este fenómeno ha sido un factor importante en la escalada de la fricción social, ya que los habitantes de estas zonas viven bajo una constante amenaza de violencia, con pocas opciones para escapar de este ciclo (Savenije, 2007).

2) Barrio 18

Es otra de las bandas transnacionales que ejerce control sobre territorios a través de violencia, extorsión y narcotráfico, con una estructura menos jerárquica que la MS-13, pero igualmente destructiva. La competencia entre ambas pandillas por el control del territorio ha incrementado la violencia en las ciudades, particularmente en áreas urbanas densamente pobladas, donde el Estado tiene poca presencia. La rivalidad entre estas bandas ha alimentado una guerra territorial que afecta tanto a desde lo local como a la estructura social en general, sumergiendo a las poblaciones en una continua inseguridad y conflictividad (Domínguez, 2010).

Las maras, en particular la MS-13 y el Barrio 18, han tenido un impacto negativo y profundo en la seguridad pública y la gobernabilidad en Centroamérica. Las actividades de estas bandas, como el cobro de extorsiones a empresas locales, el control de los mercados ilegales y el secuestro de personas, contribuyen a la desestabilización de las economías locales y al deterioro de las instituciones del Estado. Esto ha generado un vacío de poder que las maras han aprovechado para expandir su dominio, debilitando la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y fomentando una creciente desconfianza en el gobierno. La violencia que ejercen estas pandillas, junto con su control sobre amplias áreas urbanas, ha erosionado la gobernabilidad en la región, lo que incrementa la crisis social al generar un ciclo de violencia constante y un ambiente de impunidad (Centro de Investigación de Crimen Organizado, 2016).

Los efectos socioeconómicos de las maras en Centroamérica son devastadores, ya que las pandillas afectan directamente las condiciones de vida de millones de personas. El control de las maras sobre territorios, combinado con su práctica de extorsión a empresas y negocios locales, ha creado un clima de inseguridad que ha reducido las oportunidades económicas en muchas áreas. Los comerciantes, especialmente los pequeños y medianos, se ven obligados a pagar "impuestos" a las pandillas para poder operar en paz, lo que genera un círculo vicioso de empobrecimiento.

Las personas que no se alinean con estas pandillas a menudo se ven forzadas a abandonar sus hogares, lo que ha generado altos índices de desplazamiento forzado tanto dentro de los países como a nivel transnacional. Este desplazamiento interno y externo alimenta aún más la violencia social, ya que las personas desplazadas enfrentan nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad, y contribuyen a la presión sobre los servicios públicos y recursos de otros lugares, exacerbando las tensiones sociales y económicas en la región (Carrillo, 2023).

I. Escenarios Prospectivos de la Conflictividad Social en América Latina

1) Variables clave para el análisis

Para analizar los escenarios futuros de la conflictividad social en América Latina, es fundamental considerar diversas variables clave que influirán directamente en la estabilidad y desarrollo de la región. En primer lugar, el papel del narcotráfico y las organizaciones criminales sigue siendo un factor decisivo, ya que el control territorial de estas bandas puede determinar la capacidad del Estado para ejercer su autoridad y garantizar la seguridad. La efectividad de las políticas públicas para enfrentar el crimen organizado y la corrupción en las instituciones es otra variable esencial; la falta de transparencia y de un sistema judicial independiente puede perpetuar los ciclos de violencia y desigualdad. Además, la evolución de los conflictos políticos internos y la interacción entre los movimientos sociales y los gobiernos son medulares, ya que las protestas y las demandas de justicia social podrían generar cambios sustanciales en las dinámicas políticas de varios países de la región (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011).

Las condiciones socioeconómicas, como el empleo, la educación y la salud, seguirán siendo factores críticos, ya que la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos fomentan la exclusión y la marginación social, lo que a su vez alimenta las tensiones y conflictos. La integración regional y la cooperación entre países también serán variables importantes, ya que las soluciones a problemas transnacionales, como el narcotráfico y la migración, requieren un enfoque conjunto.

2) El rol del Estado en la gestión de la conflictividad: Sistemas de alerta y respuesta temprana

En América Latina, los sistemas de alerta y respuesta temprana juegan un rol significativo en la gestión de las crisis sociales, ya que permiten a los gobiernos identificar y abordar potenciales crisis antes de que se conviertan en situaciones de violencia generalizada. Estos sistemas se basan en la recopilación de datos en tiempo real y en el monitoreo constante de indicadores clave como el nivel de pobreza, la distribución desigual de recursos, la violencia política y social, y la actividad de grupos criminales organizados. Al implementar mecanismos efectivos de alerta, el Estado puede anticipar disturbios sociales, movilizar recursos de manera adecuada y establecer políticas de contención antes de que los conflictos se intensifiquen. Sin embargo, la implementación de estos sistemas enfrenta desafíos en muchos países, como la falta de infraestructura tecnológica, la baja capacidad institucional y la falta de coordinación entre distintas agencias gubernamentales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018).

Una de las principales dificultades para el desarrollo de sistemas de alerta eficaces en América Latina es la fragmentación de los servicios de inteligencia y seguridad. La falta de colaboración entre diferentes niveles de gobierno y entre los actores de la sociedad civil puede obstaculizar el proceso de identificación temprana de riesgos. Además, la desconfianza en las instituciones por parte de la población puede reducir la eficacia de las alertas. La transparencia y la participación ciudadana en la creación de estos sistemas son esenciales para que los ciudadanos se sientan incluidos en la gestión de la conflictividad y se establezca una relación de confianza mutua.

El Estado también debe garantizar la capacitación y profesionalización de los actores clave en la respuesta temprana, incluyendo las fuerzas de seguridad, el sector salud y las organizaciones civiles. Un sistema de alerta eficaz no solo depende de la tecnología, sino también de la capacidad de respuesta de los equipos involucrados, quienes deben estar preparados para actuar con rapidez y con conocimientos adecuados para prevenir la escalada de los conflictos. La colaboración internacional en la creación de sistemas de alerta, como el intercambio de información y buenas prácticas, puede ser beneficiosa, especialmente en contextos donde las crisis son transnacionales, como el narcotráfico o los movimientos migratorios masivos.

La implementación de sistemas de alerta debe ir acompañada de una evaluación continua para garantizar su efectividad. Esto incluye la revisión de los protocolos de respuesta ante eventos de conflictividad y la capacidad de los actores estatales para actuar de forma coordinada. La adaptación constante a nuevas amenazas y el aprendizaje de experiencias previas son fundamentales para mejorar estos sistemas y reducir la vulnerabilidad de las sociedades latinoamericanas ante futuros brotes de violencia y conflictos, igualmente las estrategias preventivas y reactivas son esenciales para abordarla, ya que se busca abordar las causas estructurales de los conflictos antes de que se conviertan en violencia abierta. En muchos casos, esto implica invertir en educación, salud, creación de empleo, y mejora de la distribución de la riqueza, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, promoción de la participación ciudadana, reforma del sistema de justicia y fomento de la cohesión social a través de políticas inclusivas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018).

3) Respuestas estatales y cooperación internacional

Las respuestas estatales ante este tipo de conflictividad deben ser multicapas y coordinadas, dado que los conflictos suelen ser complejos y multidimensionales. El fortalecimiento del Estado de Derecho es una prioridad para garantizar que las respuestas sean legítimas y eficaces. Esto implica asegurar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos, que la justicia

sea accesible a todos y que la corrupción no interfiera con la toma de decisiones, así mismo los gobiernos deben ser capaces de movilizar recursos rápidamente para enfrentar crisis sociales, como el aumento de la violencia o los desplazamientos masivos de personas. Sin embargo, la falta de capacidad institucional, la corrupción y la politización de las fuerzas de seguridad son algunos de los principales obstáculos que enfrentan muchos Estados latinoamericanos en la gestión de las problemáticas sociales (Castillo, 2020).

En este contexto, la cooperación internacional juega un papel fundamental, tanto a nivel bilateral como multilateral, para mejorar la capacidad de los países latinoamericanos para abordar los problemas de violencia, inseguridad y gobernabilidad. La cooperación internacional no solo se refiere a la ayuda financiera, sino también a la transferencia de conocimientos y buenas prácticas en áreas como la reforma del sistema judicial, la seguridad pública y la mediación de conflictos.

De igual manera, las alianzas entre los países de la región son clave para enfrentar problemas transnacionales, como el narcotráfico, migraciones forzadas y organizaciones criminales, permitiendo una respuesta más coordinada frente a los desafíos que sobrepasan las capacidades de los Estados individuales. A través de tratados y acuerdos de cooperación, los países latinoamericanos pueden compartir información de inteligencia, coordinar esfuerzos en el combate al crimen organizado y fomentar la seguridad fronteriza.

4) Desafíos actuales de la seguridad nacional y regional

En el ámbito nacional, la seguridad enfrenta desafíos que trascienden la dimensión estrictamente militar, incorporando problemáticas vinculadas a la violencia social, el crimen organizado transnacional y la persistencia de desigualdades estructurales que alimentan la conflictividad. Sumado a eso, es necesario fortalecer las capacidades institucionales del Estado, particularmente en materia de inteligencia estratégica, ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas y resiliencia ante desastres naturales, fenómenos cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático.

Es de recordar que las organizaciones criminales transnacionales, como las maras o el Tren de Aragua, han logrado establecer control territorial en zonas vulnerables, desafiando la autoridad estatal y generando dinámicas de violencia que afectan no solo a las víctimas directas, sino también a la estructura económica y social de los países, lo cual exacerba la persistente desigualdad, desempleo juvenil, corrupción y falta de acceso a servicios básicos, que alimentan la exclusión y crean condiciones propicias para el reclutamiento por parte de grupos delictivos.

En el plano regional, los desafíos adquieren una complejidad mayor debido a la interdependencia entre los Estados y la naturaleza transfronteriza de las amenazas. El narcotráfico, la migración irregular, el tráfico ilícito de armas y la injerencia de actores extrarregionales configuran un escenario en el que la cooperación entre países resulta imprescindible. De ahí que la ausencia de sistemas de alerta temprana robustos y la escasa interoperabilidad entre agencias de seguridad dificultan la anticipación de crisis y la respuesta oportuna. Por lo que es imperativo fortalecer el Estado de derecho, profesionalizar las fuerzas de seguridad, y fomentar la cooperación internacional no son solo medidas deseables, sino imperativos estratégicos para enfrentar los riesgos emergentes y preservar la estabilidad democrática en la región.

Conclusiones

La conflictividad social en América Latina está profundamente relacionada con factores estructurales: La desigualdad económica, la exclusión social, la crisis institucional y la debilidad del Estado son algunos de los principales factores que generan y la perpetúan en la región. Estos elementos interrelacionados crean un caldo de cultivo para la violencia y la inestabilidad, lo que exige un enfoque integral para su abordaje. Las políticas públicas deben atender no solo las consecuencias inmediatas de los conflictos, sino también sus causas subyacentes.

La expansión del crimen organizado ha generado nuevas dinámicas de violencia: Grupos criminales como el Tren de Aragua, las maras en Centroamérica, y organizaciones de narcotraficantes en Ecuador han alterado el panorama de la seguridad en América Latina. Estas

bandas transnacionales y grupos criminales han adquirido un control territorial cada vez mayor, lo que ha complicado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad pública y el orden social, sumado a ello la violencia generada por estos grupos afecta no solo a las víctimas directas, sino a toda la estructura social y económica de los países afectados.

La cooperación internacional es clave para abordar la conflictividad transnacional: Dado que muchas de las crisis sociales y de seguridad en América Latina tienen un carácter transnacional, la cooperación entre países de la región, así como con organismos internacionales, es esencial para afrontar eficazmente los problemas de narcotráfico, migración y crimen organizado. Solo a través de un esfuerzo conjunto, compartiendo inteligencia y recursos, los Estados latinoamericanos podrán hacer frente a amenazas que superan sus capacidades individuales.

El crimen organizado ha alterado la seguridad regional debido a su crecimiento y ser organizaciones criminales transnacionales, provocando que estos grupos no solo operen en el ámbito criminal, sino que también desafían la autoridad estatal, controlando territorios y afectando la economía local. La violencia y las dinámicas de control territorial que establecen impactan directamente en las comunidades vulnerables.

Las políticas deben centrarse en mejorar la distribución de la riqueza, promover la creación de empleo digno, y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos como salud, educación y vivienda. Solo con un desarrollo económico inclusivo se podrá reducir la exclusión social, uno de los principales motores de los conflictos.

Actualmente la naturaleza de la conflictividad ha mutado hacia amenazas híbridas de carácter transnacional, donde actores no estatales, como bandas criminales internacionales y carteles de narcotráfico, desafían directamente el monopolio de la fuerza del Estado. Estos grupos operan como poder paralelo, controlando territorios, economías locales y corroyendo las instituciones desde dentro mediante la corrupción sistémica. Frente a esta realidad, el principal desafío estratégico es la formulación de respuestas

igualmente integrales y cooperativas. La soberanía nacional se ve sobrepasada por problemas que ignoran las fronteras, haciendo imperativa una cooperación regional robusta que trascienda la retórica y se materialice en sistemas compartidos de inteligencia, armonización legal y operaciones conjuntas. Simultáneamente, se requiere un cambio de paradigma en la política de seguridad, que debe dejar de ser reactiva y puramente policial-militar para volverse preventiva. Esto implica atacar los factores estructurales que alimentan estas amenazas fortaleciendo al mismo tiempo la legitimidad y la presencia integral del Estado en los territorios vulnerables para disputar el control a las organizaciones criminales.

Por tanto, es imperativo que los Estados de la región implementen sistemas de alerta temprana que permitan identificar de manera proactiva los signos de descontentos sociales. Estos sistemas deben estar respaldados por una infraestructura tecnológica adecuada, así como por la capacitación de actores clave como fuerzas de seguridad, instituciones de justicia y organizaciones civiles. La colaboración interinstitucional y la transparencia en la información son esenciales para una respuesta temprana efectiva.

Al contrastar el actual escenario de vulnerabilidad institucional y amenazas transnacionales, la seguridad nacional y regional exige mucho más que respuestas tácticas o reactivas, por lo que se concluye que es necesaria una arquitectura estratégica capaz de integrar inteligencia contextual, cooperación interagencial y pedagogía crítica para formar líderes que comprendan la complejidad del entorno y actúen con criterio, ya que la debilidad en la interoperabilidad y la escasa anticipación de crisis no son fallas técnicas, sino síntomas de una cultura institucional que aún no ha internalizado la seguridad como un proceso multidimensional y sostenido.

Ahora bien, la prospectiva de la conflictividad en América Latina estará signada por la capacidad de los Estados para disputar el control territorial a actores híbridos y criminales, cuya operatividad transnacional y poder corrosivo representan la mayor amenaza a la seguridad regional. Esto impone la urgente necesidad de trascender las políticas de seguridad meramente reactivas y

desarrollar, con base en el análisis de escenarios, una arquitectura de cooperación regional concreta centrada en unidades de inteligencia conjunta y protocolos unificados de persecución penal que pueda anticiparse y dismantlar las redes logísticas y financieras de estas organizaciones. Pues la experiencia indica que la estabilidad futura no dependerá únicamente de la fuerza, sino de la efectividad de una gobernanza multinivel que aborde simultáneamente la exclusión social como caldo de cultivo del crimen y fortaleza de manera irreversible la legitimidad institucional.

Bibliografía

- Aragón Sánchez, G. (2020). *Poder, dominación y legitimidad: apuntes conceptuales para una agenda de investigación*. Obtenido de Instituto de Estudios Peruanos: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/05/Aragon_Sanchez_P
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2024). *La Realidad Social una introducción a los Problemas y Políticas del Desarrollo Social en América Latina*. Obtenido de BID Invest: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-Realidad-Social-Una-introducci%C3%B3n-a-los-Problemas-y-Pol%C3%ADticas-del-Desarrollo-Social-en-Am%C3%A9rica-Latina-Modulo-I-Pobreza-Desigualdad-y-Movilidad-Social.pdf>
- Barreira, C. (2013). *Violencia política y conflictos sociales en América Latina*. Bogotá: CLACSO.
- Bustamante, P. (2019). *La corrupción política como crimen organizado transnacional*. Medellín: Universidad de Medellín.
- Cantamutto, F. (2013). *Cambios en la conflictividad y la estructura social latinoamericana. Un estudio comparativo*. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.
- Carrillo, A. (2023). *Debilidad institucional y atención al desplazamiento forzado en México*. Tijuana: Colegio de la Frontera Norte.
- Castillo, K. (2020). *Respuestas institucionales ante conflictos sociales en Colombia, México, Perú y Guatemala*. México: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
- Centro de Investigación de Crimen Organizado. (2016). *La MS13 en América Cómo la pandilla callejera más notoria del mundo escapa a toda lógica y se resiste a ser destruida*. Medellín: InSight-Crime.
- Coser, L. (1956). *Las funciones del conflicto social*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Dammert, L. (2025). *La evolución del crimen organizado en América Latina*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.
- Domínguez, A. (2010). *Etnografías de violencia y muerte: La Mara Salvatrucha y el Barrio 18*. Iztapalapa: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- González, L. A. (2019). *Debilidad del Estado y violencia criminal*. San Salvador: Universidad Don Bosco.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. Buenos Aires: McGraw-Hill.
- Hernández, A. (2021). *Una revisión de conceptos y problemas sobre la corrupción*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Hoffman, F. (2004). *Inevitable Surprises: Thinking Ahead in a Time of Turbulence*. Obtenido de Naval War College Review :<https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2160&context=nwc-review>
- Lederach, J. P. (1997). *Construyendo la paz: reconciliación sostenible en sociedades divididas*. Bilbao: Gobierno Vasco.
- Medina Vásquez, J., & Ortigón, E. (2006). *Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe*. Obtenido de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5490/1/S0600190_es.pdf

Morejón, B. (2022). *El rol de los actores no estatales en la seguridad regional: Movimientos sociales, Delincuencia Organizada y Grupos Armados*. Quito: Centro de Estudios y Pensamientos Estratégicos.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2011). *Delincuencia organizada transnacional -La economía ilegal mundializada*. New York: UNODC.

Orrego, C. (2000). *Corrupción y modernización del Estado*. Santiago: Banco Interamericano de Desarrollo.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.(2011). *Los conflictos sociales en America Latina*. La Paz: PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). *Guía Práctica para el Diseño de Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana de Conflictos Sociales*. New York: PNUD.

Sampó, C. (2004). *Corrupción y debilidad institucional: Factores de inseguridad*. Buenos Aires: Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales.

Savenije, W. (2007). *Las pandillas transnacionales o maras: Violencia urbana en Centroamérica*. México: Colegio de México.

Schmalbach, J., Díaz, H., & Gómez, J. (2010). *La planeación por escenarios: Revisión de conceptos y propuestas metodológicas*. Obtenido de Schmalbach, J., Díaz, H., & Gómez, J. (2010). La planeación por escenarios: Revisión de conRevista de Ciencias Estratégicas: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3634575.pdf>

Serrano, J. (2015). *Crimen organizado: Una aproximación al fenómeno*. Valencia: Gaceta internacional de ciencias forenses.

Trejos, F. (2016). *Los actores no estatales en la sociedad internacional: Una aproximación a la diplomacia ciudadana en Colombia*. Barranquilla: Universidad del Norte.

Tromben,V.,Cea,C.,&Acuña,C..(2022).*Metodología de medición de la cohesión social en América Latina y el Caribe: aprendizajes y desafíos futuros*. Obtenido de Comisión Económica para AméricaLatina y el Caribe(CEPAL):<https://repositorio.cepal.org>

Troncoso,V.(2024). *El Tren de Aragua: La transnacionalidad del crimen organizado*. Bogotá: Análisis Político.

Unidad Investigativa de Venezuela. (2023). *Tren de Aragua de megabanda carcelaria a empresa criminal transnacional*. Medellín: InSight-Crime.

Vega, A. (2007). *Viejos y nuevos actores violentos en América Latina*. México: Colegio de México.

Weber, M. (2002). *Economía y sociedad*. México DF: Fondo de Cultura Económica.



MSc. Daniel López Fuentes

Estudios realizados:

El Magíster Daniel López Fuentes es parte del Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología de El Salvador acreditado por CONACYT, dentro del ámbito académico se destaca por ser el primer graduado con CUM HONORÍFICO de la Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador (2008). Realizó el Curso de Formación Pedagógica para Profesionales, permitiéndole ser docente tanto en el área básica como superior, según el escalafón docente que el Ministerio de Educación acredita. En el año 2016 terminó la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación, en el 2022 se graduó de la Maestría en Criminología, por último, posee el Diplomado Formación Pedagógica en Tutoría y Administración de Aulas Virtuales.

Experiencia Docente:

Docencia Superior en la Universidad de El Salvador y otras universidades privadas del área metropolitana de San Salvador. Así mismo perteneció al equipo de Docentes-especialistas de la Escuela Superior de Maestros (ESMA) del Ministerio de Educación; a la vez tiene experiencia como autor de libros de estudio en la Editorial Santillana; además tuvo la oportunidad de ser Investigador de los Bienes Culturales Inmuebles de El Salvador: Palacio Nacional y Ex-Casa Presidencial, para CONCULTURA. Forma parte de la Jefatura de Investigación del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, desempeñándose como Docente, Investigador, redactor y editor de libros y artículos de interés institucional.



Copyright (c) Daniel López Fuentes

